

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez-Parga. 1982-1991
Editor: Fredy Rivera Vélez
Asistente General: Margarita Guachamin

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: US\$. 9

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 12

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$. 3

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Fax: (593-2) 2568452

E-mail: caap1@caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Magenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazu Offset

ESTE NÚMERO DE LA REVISTA CONTÓ CON EL APOORTE DE LA
FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL STIFTUNG



ISSN-1012-1498

ECUADOR DEBATE

62

Quito-Ecuador, agosto del 2004

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Fuerzas armadas ecuatorianas: 2004 / 7-19

Diego Pérez Enríquez

Los desafíos del sistema multilateral después del 11-S y la guerra de Irak / 21-32

Mabel González Bustelo

Conflictividad socio – política / 33-40

Marzo 2004 – Junio 2004

TEMA CENTRAL

¿Por qué se deslegitima la democracia? El desorden democrático / 41-82

J. Sánchez Parga

Antipolítica, representación y participación ciudadana / 83-102

César Montúfar

La legitimidad para unos es ilegitimidad para otros: polarización y golpe de estado en Venezuela / 103-118

Margarita López Maya

Bolivia: La erosión del pacto democrático / 119-136

Stéphanie Alenda

Credibilidad política e ilusiones democráticas: Cultura política y capital social en América Latina / 137-160

Marcello Baquero

Proceso decisorio y democracia: impases y coaliciones en el gobierno de Lula / 161-186

Luzia Helena Herrmann de Oliveira

DEBATE AGRARIO

El mercado de tierras en el cantón Cotacachi de los años 90 / 187-208

Fernando Guerrero

ANÁLISIS

El eterno retorno del populismo en el pensamiento político ecuatoriano / 209-232

Pablo Andrade A.

La emergencia de *Outsiders* en la región andina: Análisis comparativo entre Perú y Ecuador / 233-250

Marco A. Córdova Montúfar

La reelección legislativa en Ecuador: Conexión electoral, carreras legislativas y partidos políticos (1979-1998) / 251-270

Andrés Mejía Acosta

La agenda 21 y las perspectivas de cooperación Norte-Sur / 271-282

Andreas Otto Brunold

La legitimidad para unos es ilegitimidad para otros: polarización y golpe de estado en Venezuela*

Margarita López Maya**

Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre los ha habido y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, actores de vocación democrática los combaten dentro del Estado de derecho. Es la única garantía para quienes no son poderosos de ver que sus derechos e intereses sean respetados.

Preámbulo

La sociedad venezolana vivió en el 2002 uno de los años más convulsionados de su historia contemporánea. Fracturada en dos bloques poderosos que se enfrentaron continuamente a lo largo del año, en dos oportunidades el Estado hubo de afrontar una insurrección de grandes proporciones que puso en peligro la continuidad del gobierno del presidente Hugo Chávez, elegido abrumadoramente en comicios democráticos de 1998 y 2000.

El golpe de Estado del 11 de abril al igual que el paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre de ese año, que perduró has-

ta febrero de 2003, constituyen dos episodios estrechamente relacionados. En ambos una significativa porción de venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno desconociendo su legalidad y legitimidad, mientras otra también significativa porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para defenderlo. Hacia marzo de 2003 pareció cada vez más claro que el Presidente lograba prevalecer sobre estas formidables insurrecciones, sin que ello significara una resolución clara y/o estable de la lucha hegemónica entre estas dos partes de la sociedad. Esa lucha perduró hasta hoy.

* Este artículo es una reelaboración de "El golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y sus causas" publicado en octubre de 2002 en la revista colombiana *Sociedad y Economía* (no. 3, pp. 7-18). Se han hecho los ajustes necesarios a la temática de esta publicación, así como se ha revisado y actualizado la información empírica relativa al golpe y los días siguientes.

** Margarita López Maya es historiadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y directora de la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*.

Es el propósito de este artículo examinar el golpe de Estado del 11 de abril desde la problemática de la legitimidad política. En otras palabras, nos interesa comprender por qué un gobierno democráticamente electo y ratificado, que incluso en sus primeros 2 años cumplió algunas de las demandas más exigidas por el electorado venezolano en la última década, es repudiado y desconocido por una parte de la población —hasta el extremo de sentirse legítimamente autorizada a usar la violencia para deponerlo— mientras es respetado y amado por otra.

La polarización social y política que esta realidad venezolana revela, con sus nefastas consecuencias para la convivencia pacífica y democrática de la sociedad, es un fenómeno que viene creciendo en visibilidad, no sólo en América Latina, o en países periféricos al capitalismo, sino incluso en países centrales como EEUU. Comprender los resortes que llevan a ella, podrá contribuir a encontrar los mecanismos para desactivarla, en la búsqueda de un orden social y político más incluyente para las mayorías de nuestras sociedades. Este artículo aspira a contribuir a esclarecer aspectos de esa problemática.

El artículo se ha dividido en dos partes. En la primera se elabora una reconstrucción de la manera más precisa posible de lo acaecido entre el 11 y el 14 de abril de 2002. En la segunda, se desarrolla una interpretación de las causas que concurrieron para impulsar la situación insurreccional, poniendo de relieve el problema de la legitimidad del gobierno de Chávez para una parte de la sociedad venezolana.

Como se sabe, la reconstrucción de hechos tan polémicos como los que aquí abordamos, es una tarea compleja, llena de dificultades. En este caso, a ya dos años de distancia de los hechos, se ha procedido a confrontar entre sí diversas fuentes hemerográficas de esos días, utilizándose información procedente de al menos 6 periódicos, 4 nacionales y dos extranjeros: *El Nacional*, *El Universal*, *Tal Cual*, *El Nuevo País* (tomando exclusivamente la versión de la periodista Patricia Poleo), *El País* (España), *La Jornada* (México). Adicionalmente, se han tomado algunas informaciones bajadas de *internet*, de esos días y de los meses y años siguientes, de portales de diverso signo ideológico, así como documentos, entrevistas y otras publicaciones que han venido saliendo a la luz pública desde entonces.

Los sucesos

El día 11. El golpe de Estado del 11 de abril tuvo como desencadenante directo el paro laboral de los empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la industria petrolera propiedad del Estado venezolano, motivado por el nombramiento por parte del Ejecutivo Nacional en febrero de este año de una nueva directiva para la empresa. Si bien es atribución legal del Ejecutivo Nacional el nombramiento de todos los miembros de la directiva, la alta gerencia mostró su rechazo a las designaciones, argumentando que el gobierno de Chávez había desconocido los criterios “meritocráticos” que eran consuetudinarios y procedían de la gestión interna de la compañía. Este paro petrolero fue apo-

yado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que el día 9 de abril llamó a paro laboral de 24 horas en solidaridad con la empresa. El paro de la CTV contó con el apoyo explícito de los sectores empresariales representados en Fedecámaras, así como de la iglesia católica representada por el Episcopado Venezolano. El paro tuvo ese martes 9 sólo un éxito parcial, pues a diferencia del paro cívico del 10 de diciembre del 2001 (v. López Maya, 2002), no logró parar el transporte colectivo, ni el servicio bancario, ni los centros de acopio y distribución de víveres y alimentos a los mercados mayores y menores de la ciudad capital ni otros varios servicios. La situación fue similar en otras ciudades del país, había más o menos paralización de comercios y abastos y algunos servicios como el de educación privada, pero la huelga carecía de la contundencia del 10 de diciembre. El paro no evidenciaba capacidad de mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, la directiva de la CTV, en lo que pareció una decisión temeraria, convocó el 9 en la tarde este paro por 24 horas más. El miércoles 10, el paro seguía sin expresar contundencia y la manifestación convocada esa tarde frente a la sede de la CTV tampoco fue muy nutrida. Sin embargo, los dirigentes de la confederación sindical sorprendentemente llamaron esa tarde a una huelga general indefinida. Como es sabido, pero vale la pena enfatizarlo, una

huelga general indefinida tiene un carácter insurreccional. Con esa decisión, la CTV como representante de los trabajadores sindicalizados, se declaraba en rebelión total frente al gobierno.

La decisión insurreccional de la CTV fue respaldada ampliamente por sectores empresariales organizados y por una gama de organizaciones sociales de clase media y alta, y partidos políticos de oposición. El partido Primero Justicia, por ejemplo, en boca de uno de sus dirigentes, Leopoldo Martínez, dijo: "Vamos hasta el final, hasta que caiga [el presidente Chávez]"; Cipriano Heredia de la organización social Visión Emergente declaró: "...estamos aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución, porque el gobierno se ha salido de su cauce constitucional con lo que hizo contra los medios y el allanamiento contra AD" (*El Universal* | 11-04-02).¹ La "Coordinadora por la Democracia y la Libertad" (CD), que estas organizaciones habían constituido en meses anteriores con la finalidad de luchar para obtener la renuncia de Chávez, convocó a una marcha desde el Parque del Este en el este de la ciudad de Caracas hasta la sede de Pdvsa en Chuao, también en el este de la ciudad, para el día jueves 11 en la mañana.

El 11 de abril, una nutrida marcha se inició hacia las 10 de la mañana e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de Pdvsa en Chuao, los convocantes, en especial Fe-

¹ Estos artículos se refieren, el primero, al deber de la ciudadanía de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución. El segundo, da derecho a los ciudadanos de desconocer cualquier régimen que contrarie los "valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos"

decámaras, la CTV y algunos dirigentes de otras organizaciones sociales, animados por las dimensiones de la marcha decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al Palacio Presidencial de Miraflores para, como lo señaló Carlos Ortega, presidente de la CTV, "sacar a Chávez". La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informados, convocados y cubiertos por los canales privados de televisión. De manera que la marcha fue creciendo en la medida que iba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta los canales televisivos pasaban la propaganda gratis para que todos los venezolanos concurrieran a la insurrección. Porque esta marcha también tenía evidente naturaleza insurreccional: se estaba haciendo sorpresivamente y sin notificación alguna dentro de una huelga general indefinida.

Por su parte, el gobierno constitucional estaba en el Palacio Presidencial de Miraflores, rodeado por simpatizantes que estaban haciendo ya el tercer día de vigilia desde que estallara el paro laboral, protegiendo al Presidente. Al conocerse poco después del mediodía que la marcha opositora proseguía hacia Miraflores, el partido de gobierno, el Movimiento Quinta República (MVR) comenzó a convocar de urgencia a sus simpatizantes y militantes para que con su presencia impidieran que la oposición llegase a las puertas del palacio, previendo acertadamente que podía producirse una situación de alta violencia. Los ánimos, a diferencia de la fiesta que se estaba desarrollando en el este de la ciudad eran de creciente ira, posi-

blemente mezclados con sentimientos de temor: las sólidas manifestaciones pro-gobierno de los últimos meses habían sido pobremente reseñadas por los medios de comunicación impresos o audiovisuales. En contraste, las protestas de la oposición recibían siempre amplia cobertura audiovisual y se agigantaban en los diarios impresos. Las encuestas que se publicaban mostraban una baja sorprendente de la popularidad del gobierno. Pronunciamientos militares en los últimos meses corroboraban que en los cuarteles había inquietud y rebelión. Los simpatizantes del Presidente estaban resentidos. Se agolpan alrededor de Miraflores con gritos de confrontación: "No pasarán" - repetían.

Al entrar la marcha opositora al centro de Caracas (aproximándose al palacio presidencial), comenzaron los disturbios. Hacia las 2:00 p.m. las multitudes prochavistas estaban tirando piedras y palos hacia el hotel Edén, que queda al lado del Palacio de Miraflores, donde francotiradores apostados en la terraza estaban atacándolos (*Tal Cual*, 17-04-02). A esa misma hora en el edificio de La Nacional, en puente Llaguno, un poco más allá del palacio y donde hay oficinas de la alcaldía Libertador donde gobierna el MVR, los empleados no podían salir por la violencia que se había desatado en la calle. En la terraza de este edificio también estaban apostados francotiradores (id.). Aparecen personas armadas de lado y lado de la confrontación callejera, cuerpos policiales como la Policía Metropolitana de Caracas desenfundan armas de fuego, la violencia se desata y al final de la tarde el número de muertos alcanza las 19 vícti-

mas, pro y anti-chavistas (*El Universal*, 27-04-02)².

Estamos ya en el golpe de Estado. Las informaciones de los días siguientes revelan que hacia el mediodía un grupo de militares con el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez como cabecilla se reunieron en una oficina ubicada en la parroquia de Chacao para ensayar un pronunciamiento que harían por los medios de comunicación desconociendo al gobierno y al Presidente (*El Nacional*, 13-04-02). Se trataba, según este diario, de un grupo de militares que venían reuniéndose desde hacía meses (desde los eventos del 11 de Septiembre en Nueva York y Washington), disgustados con la política del gobierno, especialmente su acercamiento a Cuba y países como Irak e Irán, por las tensiones que esto ha provocado con EEUU. La comunicación de estos militares saldría al aire a las 7 de la noche, pues fue retardada por la cadena del Presidente que comenzó poco antes de las 4:00 p.m. Los medios audiovisuales, al comenzar la cadena del Presidente decidieron – también en clara rebeldía - dividir la pantalla, como ya lo habían hecho el día anterior, para mostrar los disturbios que están sucediendo en el centro de Caracas. El Presidente anunció que sacaba del aire a los medios privados, pero éstos, continuando su desobediencia, siguieron transmitiendo vía señal por ca-

ble. La alocución presidencial también fue sabotada por un ruido que interfería la voz en la señal. Al terminar la cadena, en el canal 10 el dirigente copeyano y hombre del Opus Dei, José Rodríguez Iturbe, exhortó a los militares a salir de sus cuarteles y terminar el trabajo que los civiles habían comenzado, según él, con un costo de sangre. A las 7:00 p.m. saldrá al aire el video del vicealmirante Ramírez y su grupo. Poco más tarde se transmitió un pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, quien informó que dicha arma no acatará ordenes presidenciales. Hacia las 8:00 p.m. el ex hombre fuerte del gobierno de Chávez y del MVR, Luis Miquilena, salió por los medios televisivos pidiendo una salida institucional a la crisis y diciendo que Chávez tenía las manos “ensangrentadas” (*El País*, 7-05-02). A esa hora los generales Manuel Rosendo y Hurtado Soucre negociaban con Chávez su salida y amenazaban con bombardear el Palacio de Miraflores (Istúriz en *La Jornada*, 17-04-02). A las 10:00 p.m. el canal del Estado fue forzado a cesar sus emisiones. A la 1:10 de la madrugada del día 12 los medios comienzan a informar que Chávez se ha entregado a los militares rebeldes. Pasadas las 3:00 a.m. el general en jefe de La Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero, anuncia que Chávez ha renunciado.

2 En abril de 2004, al cumplirse dos años del golpe, el cineasta Ángel Palacios logró una reconstrucción audiovisual pormenorizada de los hechos ocurridos en las cercanías del Palacio, en especial en Puente Llaguno donde ocurrió el mayor número de muertos. Su documental, que utilizó materiales de diversas fuentes audiovisuales, corrobora la represión violenta ejercida contra chavistas por la Policía Metropolitana (controlada por el alcalde de oposición Alfredo Peña), así como la presencia de francotiradores (v. Palacios, 2004).

Cerca de las 4:00 a.m. el Presidente sale de Miraflores hacia el Fuerte Tiuna, sede principal de las Fuerzas Armadas en Caracas, con la Escolta Presidencial. Va a ser recibido allá por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar Porras. A las 4:15 a.m. Carmona anuncia que asumirá la presidencia de Venezuela al frente de un gobierno de transición cívico-militar.

El 12 de abril. Por informaciones publicadas con posterioridad al retorno del presidente Chávez, sabemos que a la misma hora que se posesionaba el señor Carmona del cargo de Presidente comenzaban los problemas entre los diversos actores que habían contribuido a la caída del gobierno constitucional. El presidente de la CTV, y el general comandante del Ejército parece que fueron los primeros en darse cuenta que el golpe militar no iba a responder a sus expectativas (*El Nuevo País*, 17-04-02). Los intereses que querían prevalecer parece que tenían poco o nada que ver con la democracia y la participación, razón pública esgrimida para ejecutar o apoyar el golpe según casi todos sus protagonistas. Por un lado, constitucionalistas de fama redactaban un decreto autoritario que de un plumazo hacía desaparecer todos los poderes públicos constituidos; por otra parte, en nombre de la llamada “masacre de El Silencio” (los sucesos violentos del centro de Caracas del día anterior), comenzaba una cacería de brujas contra las autoridades del régimen caído. Acompañados por turbas enardecidas, alcaldes del partido Primero Justicia sacaban de sus moradas humillantemente a funcionarios del gobierno anterior. A las 5:30 de la tarde,

luego de la autojuramentación de Carmona y la emisión de su primer decreto, la situación estaba clara: la salida de Chávez había conducido a la sociedad a un gobierno de facto de extrema derecha, una plutocracia. Se cambió el nombre de la república, se disolvieron los poderes públicos, se suspendió la venta de petróleo que bajo convenio se tenía establecido con Cuba, se allanaba sin orden judicial, se suspendían las 48 leyes de la Habilitante, se echaba para atrás el aumento de sueldos y salarios decretado por el gobierno derrocado. En pocas palabras se abolió el Estado de derecho.

Ante la evidencia de que Venezuela caminaba apresuradamente hacia un retroceso de todos sus logros en el siglo XX como sociedad democrática y civilizada, la resistencia que ya venía evolucionando tímidamente ese día 12 se hizo patente al caer la noche. La ciudad de Caracas fue sacudida por un cacero-lazo descomunal que se oía en los barrios populares del oeste de la ciudad, al tiempo que frente al Fuerte Tiuna comenzaron, esta vez sin convocatoria por los medios de comunicación, a reunirse las multitudes exigiendo ver a Chávez y que él les dijera “que había renunciado”. También se protagonizaban disturbios y tiroteos en esta zona de Caracas. Poco después de la alocución del ahora dictador Carmona, un medio de comunicación comunitario alternativo, radio Fe y Alegría, transmitió una entrevista con el ministro de Educación depuesto, Aristóbulo Istúriz, quien contó las últimas horas de Chávez en el palacio presidencial y señaló con claridad que éste no había renunciado. Los sec-

tores que apoyaron la insurrección del día anterior no salieron a defender el gobierno constituido. Así las cosas, los sectores populares tomaron las calles, cerraron las vías de acceso de la ciudad de Caracas para exigir el retorno de sus instituciones, de su Presidente. En otras ciudades del país también ocurría esta sorprendente movilización.

Restituida la institucionalidad

Desde la mañana del sábado 13 la situación del nuevo gobierno se hizo crítica. Carmona se reunió con su gabinete provisorio y los medios de comunicación. Estos últimos le pidieron que rectificara el decreto dictatorial e incorporara a la dirigencia de la CTV a las reuniones del poder. Se sabía que el general Raúl Isaías Baduelli, comandante del batallón de paracaidistas del Ejército, estaba en rebeldía en la base militar de la ciudad de Maracay, la principal del país, así como que estaban alzándose otras guarniciones. Las multitudes frente al Palacio de Miraflores estaban creciendo. En el Fuerte Tiuna el comandante de la Tercera División de Infantería, general García Carneiro, salió en tanqueta hacia la zona sur de Caracas, El Valle, gritándole a la multitud: ¡Soy un soldado y estoy con Chávez! (*El Nuevo País*, 18-04-02). Al mediodía comenzaron a llegar a Miraflores los designados para su juramentación como ministros del nuevo gobierno. Algunos quedarán atrapados en la sede gubernamental porque el contragolpe estaba en franco desarrollo, se dio orden de evacuar el edificio y la Guardia de Honor del palacio se alzó, mandándole señas a la multitud en la calle de que estaba con

ella. A partir de ese momento, poco después de mediodía, comenzó la llegada de los ministros del gabinete de Chávez a Miraflores. Carmona logró salir y fue trasladado al Fuerte Tiuna. A las 3:30 p.m. el comandante en jefe del Ejército sale de nuevo, como el día 11, por una cadena de los medios para anunciar que su arma sólo apoyará al nuevo gobierno si cumple ciertas condiciones, entre ellas modificar el decreto dictatorial y mantener las políticas sociales del gobierno de Chávez. Carmona anuncia que se reformará el decreto cuestionado pero ya es muy tarde. Mientras los medios de comunicación pasan una programación regular, como si nada en el país pasase, la ciudad de Caracas está cortada de sus accesos por los cuatro costados, los sectores populares marchan hacia Miraflores desde el este, el sur y el oeste, hay saqueos en distintas zonas, se van sumando las guarniciones al contragolpe, los ministros del gobierno depuesto van llegando a Palacio uno a uno. Los medios de comunicación internacionales informan, gracias a entrevistas con el Fiscal General y la esposa de Chávez, que el presidente Chávez no ha renunciado y está preso. A las 8:00 p.m. las fuerzas del gobierno constitucional retoman el canal del Estado, vuelve la señal y desde allí informan por fin a los venezolanos, que controlan Miraflores desde mediodía. A las 10:00 p.m. Carmona renuncia y a las 3:30 de la madrugada del domingo 14 el Presidente regresa en helicóptero a Miraflores para retomar al poder. Dirige unas palabras a la multitud que lo está esperando desde temprano y les hace gestos de que se vayan a dormir.

Las causas del golpe

De este recuento quedan nítidamente expuestos tres rasgos significativos de la crisis política abierta con el golpe de Estado del 11 de abril: el primero es que el golpe militar que depone a Chávez es precedido por una insurgencia civil de significativa magnitud contra la autoridad constitucionalmente electa. Esta insurrección estuvo compuesta por sectores empresariales organizados, la alta gerencia de Pdvsa, sectores medios y altos organizados en lo que ellos llaman la "sociedad civil", trabajadores sindicalizados en la CTV, jerarquía de la iglesia católica, medios de comunicación privados y partidos políticos de oposición. El segundo aspecto es que el golpe militar que derroca al Presidente, aunque sigue teniendo algunos detalles desconocidos, no es un sólo golpe, hay al menos dos sublevaciones militares distintas: una que viene de la Armada encabezada por Ramírez Pérez, que lleva meses gestándose y otra, la que en definitiva da el golpe, que es el de altos mandos del Ejército seguido luego por altos mandos de la Guardia Nacional. Aunque no se descarta, no está claro que estuvieran relacionados. El tercer rasgo es que el gobierno es repuesto por la acción simultánea de un contragolpe militar, promovido por sectores militares entre los cuales el mismo Ejército que dio el primer golpe tiene importante participación, y la movilización de sectores populares organizados y espontáneos, partidos políticos del oficialismo, medios de comunicación internacionales y nacionales alternativos, y presión de gobiernos internacionales, especialmente de la OEA.

A partir de esta evidencia las causas del golpe deben dirigirse a responder dos preguntas análogas y cruciales ¿por qué, por una parte, grupos civiles de peso decidieron emprender el día 10 y 11 una insurrección abierta contra un gobierno legítimamente constituido? O, puesto de otra manera, ¿por qué, como lo afirmaban reiteradamente desde días anteriores al golpe, estos sectores consideraban ilegítimo al gobierno? La otra, tan crucial como ésta, ¿por qué otro grupo significativo de civiles se movilizó para reponer el gobierno de Chávez poniendo en peligro incluso sus vidas? Para ellos no sólo era legal el gobierno depuesto sino legítimo. La participación civil en el golpe y en el contragolpe es el meollo de la crisis política que padecemos. Y sólo comprendiendo por qué se ha producido esta fractura de la sociedad venezolana en posiciones antagónicas, aparentemente signadas por un contenido de clase, podremos encontrar las claves para superar esta situación.

Este golpe - estos "golpes" - y la crisis política que generaron los acontecimientos de abril responden a una causalidad compleja, cuya trama se fue tejiendo en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades. En lo que sigue revisaremos a grandes rasgos esas causas, que han terminado por legitimar a Chávez para unos sectores, mientras lo han deslegitimado para otros.

El deterioro socioeconómico y la pérdida de legitimidad de la democracia construida desde 1958

Desde una perspectiva socioeconómica, la sociedad ha experimentado más de dos décadas de recesión econó-

mica y empobrecimiento social. El empobrecimiento en Venezuela ha sido brutal, creciente y sostenido, medido con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica de una sociedad (López Maya y Lander, 2000). Ha sido considerado por algunos analistas un caso paradigmático en América Latina (Rey, 1994). Para ilustrar este proceso, el cuadro no. 1 muestra el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos venezolanos a lo largo de una serie de 20 años previos a la elección del presidente Chávez, donde resalta lo errático de la economía. Esta errancia continuaría en los 2 primeros años de

gestión de Chávez. Vale la pena resaltar de ese cuadro el comportamiento del índice de precios al consumidor, que para esta serie de 21 años indica que lo que para 1979 costaba Bs. 100,00, tenía en 1999 un precio de ¡Bs. 30.923! En esto influye la sostenida devaluación del bolívar, que en la misma serie alcanza la cifra de 15.238%. El cuadro no. 2 ilustra la magnitud del desplazamiento hacia la pobreza y la pobreza extrema de las familias venezolanas. Para fines de los años 90, ambas cifras casi triplican lo que fueron al principio en 1979: casi el 50% de las familias son pobres, más de un cuarto miserables³.

Cuadro N° 1
Algunos indicadores macroeconómicos

AÑO	PIB Millones Bs. 1984	Crecimiento (variación PIB)	Inflación* (variación IPC)	Tipo de Cambio** (Bs./\$)	Reservas Internacionales **Millones \$
1979	494.942	1,50	12,83	4,30	8.819
1980	474.205	-4,19	22,89	4,30	8.885
1981	467.395	-1,44	15,94	4,30	11.409
1982	451.781	-3,34	8,52	4,30	11.624
1983	420.099	-7,01	5,85	9,90	12.181
1984	410.067	-2,39	12,16	12,65	13.723
1985	415.349	1,29	11,40	14,40	12.341
1986	431.594	3,91	11,58	22,70	11.685
1987	459.613	6,49	28,08	30,55	9.402
1988	477.564	3,91	29,46	39,30	6.555
1989	460.813	-3,51	84,47	43,05	7.411
1990	492.170	6,80	40,66	50,58	11.759
1991	532.605	8,22	34,20	61,65	14.105
1992	556.669	4,52	31,43	79,55	13.001
1993	558.202	0,28	38,12	106,00	12.656
1994	545.087	-2,35	60,82	170,00	11.507
1995	566.627	3,95	59,92	290,00	9.723
1996	565.506	-0,20	99,87	476,50	15.229
1997	601.534	6,40	50,04	504,25	17.818
1998	600.878	-0,10	35,78	564,50	14.849
1999	557.777	-7,20	23,56	655,25	15.030

* Promedio anual; ** Para el cierre de diciembre.

Fuente: Baptista, 1997, IESA, 2000, BCV, 1992 y cálculos propios en crecimiento e inflación para algunos años (tomado de López Maya y Lander, 2000).

3 Los cuadros son tomados de López Maya y Lander (2000), donde se hace un análisis más elaborado de este proceso.

Cuadro N° 2
Hogares en situación de pobreza 1980 - 1997

Año	Número de hogares	% Hogares en Pobreza	% Hogares en pobreza extrema
1980	2.806.679	17,65	9,06
1981	2.880.084	22,82	10,71
1982	3.019.932	25,65	12,14
1983	3.130.682	32,65	14,95
1984	3.183.339	37,58	18,90
1985	3.211.477	34,77	16,60
1986	3.412.139	38,88	17,67
1987	3.541.504	38,84	16,61
1988	3.659.369	39,96	16,77
1989	3.821.954	44,44	20,07
1990	3.859.923	41,48	18,62
1991	3.914.165	35,37	16,01
1992	4.032.402	37,75	15,52
1993	4.190.519	41,37	16,81
1994	4.396.784	53,65	27,52
1995	4.396.354	48,20	22,95
1996	4.549.363	61,37	35,39
1997	4.468.445	48,33	27,66

FUENTE: IESA, 2000 (tomado de López Maya y Lander, 2000).

Las cifras de estos cuadros revelan una polarización social creciente que ha derivado tanto de la recesión económica como de la aplicación de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso. Según cifras de CEPAL, la participación de los más pobres (40% de la población), cayó de 19,1% en 1981 a 14,7% en 1997. Mientras el decil más rico aumentó su participación de 21,8% a 32,8% (en Roberts, 2003). Los venezolanos pobres y empobrecidos han percibido en el transcurso de estos años que su sociedad es una de ricos y pobres con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social.

El resentimiento social que se expresa en la sociedad venezolana actual no es más que una consecuencia inevi-

table de esta evolución, pues a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, esta sociedad desde 1958 se dio un orden democrático ininterrumpido. Ese orden democrático en su momento fue concebido no sólo como un orden de libertades públicas sino también uno que promovía mayores grados de equidad y justicia social. La democracia venezolana siempre se expresó en el discurso y se entendió en la práctica como algo más amplio que la esfera política, pues para ser efectiva debía contener un proyecto socioeconómico que incorporara a toda la población en los beneficios del desarrollo (Crisp et al., 1996: 142-146). Esta idea de democracia todavía encuentra fuertes raíces en el pueblo de Venezuela. Que esto ya no se cumpla, ha resquebrajado fuertemente las bases

de legitimación de la democracia venezolana y de sus partidos políticos dominantes desde 1958. De hecho, es consensualmente reconocido por la academia el cómo la deslegitimación y final colapso de los partidos tradicionales en Venezuela tuvo un aporte significativo en el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, sin que las elites pudieran a lo largo de los 80 ofrecer una alternativa que permitiera reemprender el crecimiento económico con distribución. Este es el escenario en donde se han estado moviendo con relativo éxito los actores sociales y políticos emergentes y constituye el caldo donde se cultivan los golpes contra la democracia, tanto los de 1992 como éste de 2002.

Las bases de la legitimidad y la rebeldía

En un libro clásico de la sociología publicado en 1978 por Barrington Moore Jr., que se intitula *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, se explica como toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Moore argumenta que todo régimen político tiene sus principios de inequidad que le son propios (1978: 83). Sin embargo, cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola los límites aceptables, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela se viven tiempos de indignación moral y sentimientos de injusticia. Los límites

establecidos para la convivencia social han sido violados en primer lugar por las condiciones socioeconómicas arriba descritas, inaceptables de acuerdo a las reglas de la democracia pactada en 1958. Pero también influyen factores más coyunturales, que en última instancia explican por qué en distintos momentos los actores han optado por una rebeldía que quiebra la institucionalidad democrática.

La polarización socioeconómica señalada arriba ha encontrado en el transcurso de la década de los 90 expresión política en actores y proyectos polares también, que hasta la fecha se han mostrado incapaces de reconocerse uno al otro, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes, en la lucha por alcanzar el predominio político en la sociedad. Venezuela experimenta desde los 90 lo que Gramsci conceptuó como una "lucha hegemónica", donde distintos actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar, recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, actores han tirado el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Primero, en 1992, fueron sectores militares organizados en una organización clandestina, el Movimiento Revolucionario 200, quienes llevaron a cabo una insurrección militar. Argumentaron entonces, que tanto la implementación de un programa de ajuste neoliberal ortodoxo como la reiterada violación de los derechos humanos básicos de los sectores populares, puesto de manifiesto con especial crudeza durante el Caracazo

había hecho perder toda legitimidad a la democracia instaurada en 1958 (v. López Maya, 2003a). Ahora, en 2002, son los sectores de clase alta y media organizada, quienes muy similarmente a los actores de 1992, también argumentando la violación de sus derechos e intereses, emprendieron este golpe cívico-militar del 11 de abril. Afortunadamente, ambos fracasaron en sus momentos, permitiendo la continuación de la lucha dentro de canales institucionales democráticos.

Desde 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas en elecciones transparentes, alcanzó el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral, Chávez y la alianza de fuerzas conocida como el *Polo Patriótico*. Cristalizó entonces esta hegemonía. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referéndum constitucional de 1999 y en elecciones de 2000. Fue un paso más en la consolidación de su hegemonía. Chávez y su alianza política representan principal, aunque no exclusivamente, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran inclusión y justicia social. Son la expresión política del polo social, que desde finales de los años 80 desconoció la legitimidad de los partidos tradicionales y se ha resistido a las reformas neoliberales, entre éstas, al

achicamiento del Estado⁴. En contraste, sus adversarios, con distintos matices e ideologías, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, menos afectado por los procesos de empobrecimiento, pero temerosos de una exclusión en el actual proyecto. Por el momento han perdido hegemonía.

Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se esconden, hay sin embargo, factores adicionales que a mi modo de ver han llevado la confrontación legítima por momentos a un antagonismo extremo que dificulta la construcción de una salida democrática que restablezca la convivencia social pacífica entre los venezolanos.

Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez alteró reglas de la convivencia social venezolana anterior, en el sentido que le da Moore al término: aprobó leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático; hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para amedrentar a la oposición cuando ésta ejerció su derecho a la protesta; aunque es indispensable reconocer que en los tres años de gobierno de Chávez previos al golpe

4 Si bien el rechazo a los partidos tradicionales es generalizado en todas las capas sociales, Roberts ha señalado cómo en los 90 fue produciéndose una escisión de la cultura política de acuerdo a la situación de clase. Los sectores populares siguieron sosteniendo la necesidad de la intervención estatal en asuntos económicos, mientras los sectores altos y parte de los medios abrazaban las reformas neoliberales (Roberts, 2003: 85-86).

de abril, la represión del Estado a estas movilizaciones ha sido notoriamente baja en contraste a las prácticas de gobiernos previos (v. Provea, informes anuales correspondientes). El Presidente ha recurrido permanentemente a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público; el oficialismo también buscó penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social (v. Parker, 2002).

Muchos de los actores sociales y políticos de la oposición no necesariamente anti-democráticos se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, y convocaron a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. Estos sectores, en medio de su resentimiento, respaldados por medios de comunicación, también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión, la mayoría de las cuales también estaban polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición, se trataba de una insurrección "popular" mayoritaria, por no decir unánime. El gobierno no tenía ya piso político según estos grupos. Pero, como se hizo patente en el recuento anterior, la movilización cívico-militar del 13 de abril demostró que esto era un craso error de diagnóstico.

¿Por qué la oposición no percibía al otro, a los sectores populares que se-

guían dándole un sólido respaldo a Chávez y su proyecto político? Aquí entraron en juego varios factores.

Un primer aspecto a resaltar es la errada percepción de unidad y homogeneidad social con que la oposición percibía la sociedad venezolana, percepción que incluso convulsiones sociales como el Caracazo, o la sostenida turbulencia sociopolítica expresada en la intensa política de calle que se desarrolla en la sociedad desde los años 90, no había logrado erradicar. Si bien fue claro desde el Caracazo que se había producido una ruptura entre elites políticas y sociedad, lo que acertadamente se ha señalado como clave explicativa del proceso de deslegitimación del sistema de partidos, nunca fueron seriamente evaluadas antes de 2002 las consecuencias sociales, espaciales y políticas de polarización producidas por la recesión económica y las políticas de ajuste. En Venezuela se estaba produciendo una creciente y aguda polarización social, que tenía una importante dimensión espacial. De manera creciente la sociedad venía escindiéndose en dos polos según nivel de ingreso, pero, además, cada uno de esos polos se encerraba sobre sí misma en espacios urbanos que no se tocaban. Clases medias y altas desarrollaban sus actividades de trabajo y vidas privadas, sin jamás percatarse o relacionarse con la inmensa mayoría de pobres y empobrecidos que discurrían sus vidas en otros espacios también completamente ajenos a ellos (López Maya, 2003b). Este contexto, respaldado por medios de comunicación que transmiten permanentemente imágenes de un ciudadano consumidor homogéneo, hacía escasa la posibilidad de percibir un otro ajeno.

Por otra parte, jugaría también un rol importante en esta falta de capacidad de ver al "otro", la calidad de las organizaciones sociales y políticas de oposición. O quizás habría que decir con más propiedad la calidad de sus dirigentes. Fedecámaras, los medios de comunicación privados, la alta gerencia de Pdvsa, las diversas organizaciones que se autodenominan "sociedad civil", inclusive los partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como Copei, que lideraron la insurrección de abril, siguen concepciones doctrinarias que exaltan las virtudes del ámbito privado, mientras colocan todos los vicios de la vida en sociedad en el ámbito público, en el Estado. Organizaciones sociales como las vecinales de clase media y medios de comunicación privados se fortalecieron en Venezuela durante los 90 como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos que se convirtió en sentido común. El discurso democrático de estas organizaciones se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial a un golpe de Estado, toda vez que son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen (1995: 135). De manera que les resultan irrelevantes, amenazadoras o incluso inexistentes las organizaciones populares cuya concepción de ciudadanía no puede

sino ser distinta, porque en ellos se trata de luchar por el cambio.

Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por los otros, cuando los ven, como no ciudadanos y amenazas a la propiedad y a la seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, círculos del terror, etc. para referirse a ellos. Este no es el caso de la CTV procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso electoral que los llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se plegó a las concepciones de esta llamada sociedad civil y tuvo responsabilidad central en el golpe. En cuanto al partido AD, de raigambre socialdemócrata, sus dirigencias en agudo declive desde hace años, también huérfano de proyecto político, se ha plegado a los intereses económicos de turno.

La ceguera de esta oposición le hizo juego a poderosos intereses que no creen ni les interesa la democracia, llevando al quiebre institucional y a la salida plutocrática evidenciada en la conformación del gobierno de facto del 12 de abril. Porque el 11 de abril no se estaba ante la presencia de una revuelta popular, al estilo de las que derrocaron el socialismo realmente existente en algunos países de Europa Central. O más recientemente, la revuelta popular que condujo a la renuncia del presidente De La Rúa en Argentina a fines del año 2001. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones allí reflejaban una carencia total de piso político.

co. Ese no era el caso de Chávez y su alianza política. En este caso presenciábamos una gigantesca protesta de la oposición, conformada principalmente por sectores sociales de ingreso alto y medio en rechazo a políticas de un gobierno que venía violando normas de convivencia social del régimen político anterior y ponía en peligro privilegios y jerarquías del pasado. Pero el gobierno seguía siendo legítimo para otra gigantesca porción de la sociedad. Es más, era legítimo precisamente porque buscaba cambiar reglas de juego del pasado. Ello estaba a la vista, alrededor del Palacio de Miraflores, pero no podía ser vista por la llamada "sociedad civil", entre otras razones, por la invisibilidad que se había producido del "otro" en los espacios urbanos segregados, en los medios de comunicación, y por las carencias teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas para la representación y mediación entre Estado y sociedad. Tal situación fue aprovechada por intereses oscuros y poderosos, de carácter nacional e internacional, que forman parte de la hegemonía neoliberal del contexto mundial. Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre los ha habido y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, actores de vocación democrática los combaten dentro del Estado de derecho. Es la única garantía para quienes no son poderosos de ver que sus derechos e intereses sean respetados.

Conclusión

La lucha hegemónica en Venezuela sigue desarrollándose. La paralización

de la industria petrolera entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 fue un nuevo hito de confrontación y violencia, que una vez más fue superado satisfactoriamente por el gobierno de Chávez. A partir de allí, las aventuras extra-institucionales, y sus fracasos para alcanzar la meta del derrocamiento y/o la renuncia del Presidente han debilitado a aquellos actores de oposición que persisten en salidas reñidas con la institucionalidad democrática. Estos procesos han disminuido la legitimidad de actores de la oposición, lo cual se expresa tanto en encuestas de opinión como en su escasa capacidad de convocatoria a movilizaciones callejeras de sus simpatizantes en los meses recientes. No obstante, el problema de la legitimidad del gobierno de Chávez entre los sectores medios y altos de la población sigue presente. Más aún, las confrontaciones permanentes y la intensa y sostenida campaña mediática de los medios de comunicación privados que se oponen al gobierno, parecen haber sedimentado la fractura social entre los que tienen y los que nada poseen en Venezuela, levantando enormes desafíos para la recuperación de la convivencia pacífica y democrática de la sociedad venezolana.

Bibliografía

- Crisp, Brian F. et al.
 1996 "The Legitimacy Problem" en Jennifer McCoy et al., *Venezuelan Democracy under Stress*, New Brunswick, Transaction Publishers, pp. 139-170.
- Laclau, Ernesto
 1978 "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política" en Julio Labastida Martín del Campo, *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, siglo XXI

Lander, Edgardo

1995 *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*, Caracas, Ediciones de la UCV.

López Maya, Margarita

2002 "Entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita", *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, enero, pp. 97-103.

2003a "Hugo Chávez Frías: su movimiento y su presidencia" en Steve Ellner y Daniel Hellinger, *La política venezolana en la época de Chávez*, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 97-120.

2003b "Las manifestaciones territoriales de la polarización", *El Punto Medio*, año 2, no. 5, p. 8.

López Maya, Margarita y Luis E. Lander

2000 "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, no. 3-2000, pp. 185-208.

Palacios, Ángel

2004 *Puente Llaguno. Las claves de una masacre* (documental).

Parker, Dick

2002 "Debilidades en la conducción política también facilitaron el golpe" *Observatorio Social de América Latina*, no. 7, junio, pp. 11-14.

Provea

años correspondientes. *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual*, Caracas, Provea.

Rey, Juan Carlos

1994 "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de reconciliación", *Revista de Estudios Políticos*, no. 74, pp. 533-578.

Roberts, Kenneth

2003 "Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela" en Steve Ellner y Daniel Hellinger, *La política venezolana en la época de Chávez*, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 75-96.

Moore, Barrington jr.

1978 *Injustice. The Social Bases of Obedience & Revolt*, EEUU, Macmillan Press Ltd.